

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Fragmentación y exclusión en la megalópolis mexicana [Fragmentation and exclusion in the Mexican megalopolis]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Pradilla Cobos, Emilio
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-07-09 08:12:10
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/219352

Fragmentación y exclusión en la megalópolis mexicana

Emilio Pradilla Cobos

Emilio Pradilla Cobos: profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco, México; investigador nacional SNI-SEP.

Palabras clave: exclusión, desigualdad, desarrollo urbano, México.

Resumen:

El Distrito Federal de México y sus servicios públicos atienden a la masa de población flotante proveniente de la Zona Metropolitana y otras localidades de estados vecinos y, en casos como la salud y educación, a personas venidas de todo el país. El deterioro de las condiciones de vida es expresión y causa del empobrecimiento de una parte considerable de la población de la capital. Los déficits surgen en todos los rubros de infraestructura y servicios sociales. La ciudad constituye una entidad colectiva, pero su apropiación y disfrute se privatiza e individualiza. Los costos siguen siendo comunitarios, pero no las ganancias. La metrópoli se fragmenta en mil pedazos aislados en la vida económica, social y cultural, aunque son objeto de los mismos mercados, insertos en la misma trama territorial, dominados por los mismos poderes hegemónicos que determinan su papel en ella.

La Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), está formada por el Distrito Federal (DF) y un número creciente de municipios del estado de México (entre 27 y 57 según los distintos análisis), conurbados al núcleo originario en las últimas cuatro décadas. Las dos partes de la unidad territorial tienen administraciones públicas y políticas diferenciadas, que no han logrado construir instancias y procesos adecuados de coordinación. El DF ha reducido su tasa de crecimiento poblacional desde los años 60, como efecto de la evolución demográfica nacional, del vaciamiento poblacional de sus áreas centrales y su expulsión a la periferia, sobre todo a los municipios conurbados; pero su gran masa acumulada alimenta un crecimiento absoluto de la población aún significativo. La población de los municipios conurbados crece a tasas mayores, por lo cual la ZMCM en su conjunto mantiene tasas superiores a las del DF.

El DF y la ZMCM operan como núcleo estructurador de un enorme sistema urbano

en el centro del país, una *megalópolis* en formación, que integra económica, social y territorialmente en una trama discontinua a las áreas metropolitanas de Querétaro - San Juan del Río, Pachuca, Puebla - Tlaxcala - Santa Ana, Chautempan, Cuernavaca - Cuautla y Toluca - Lerma, además de un gran número de pueblos campesinos y artesanos insertos en la trama (Garza). En el sistema hay gran movilidad y flujos intensos de mercancías y personas, que convergen hacia la ZMCM y el DF, aumentando la complejidad de su problemática particular.

La exclusión por la crisis, el neoliberalismo y la globalización

El estancamiento económico de 15 años de duración, marcado por las recesiones de 1982-1983, 1986, 1993 y 1995, y las políticas neoliberales para tratar de superarlo, frente al crecimiento demográfico metropolitano, han causado una reducción notoria del producto interno bruto por habitante. Si añadimos la concentración creciente de la riqueza empujada por la crisis y el patrón neoliberal de acumulación, nos enfrentamos al agravamiento de la desigualdad histórica de la distribución social del ingreso.

La desindustrialización, como destrucción de la base productiva, sobre todo de la micro, pequeña y mediana empresa, causada por la crisis, el libre comercio internacional, la contracción del mercado interno y la especulación bancaria, aunada a la modernización tecnológica, han reducido la capacidad de la economía para absorber la fuerza de trabajo disponible y la añadida por la evolución demográfica. Durante el periodo, la tasa de desempleo abierto de la ZMCM ha sido una de las más altas entre las metrópolis del país. En 1995, en plena recesión, alcanzó al 8,8% de la población económicamente activa (PEA) disminuyendo desde entonces a un 4,2%. Pero es un dato engañoso, pues se calcula que entre un 25 y un 40% de la PEA labora en el sector informal, en situación de desempleo parcial, inestabilidad laboral, bajos ingresos, ausencia de prestaciones sociales y malas condiciones de trabajo (Guillén Romo 1990 y 1995; Valenzuela 1986 y 1994; Valenzuela/Goicochea).

Como resultado de la aplicación de topes salariales¹ durante 20 años, el índice nacional del salario mínimo ha caído de 116 en 1976, a 35 en 1995 (pérdida del 69,83% de su capacidad adquisitiva), alcanzando el nivel de 1946. En 1990, el 60,5% de la población ocupada en el DF recibía ingresos de hasta dos salarios mínimos, insuficientes para sufragar sus necesidades básicas. El promedio de ingreso en la industria manufacturera y en el comercio es de dos salarios mínimos, y de uno en los servicios.

Los receptores de la fuerza de trabajo desempleada o empobrecida han sido el

¹ Aumentos porcentuales del salario nominal inferiores a la tasa de inflación anual, impuestos a los trabajadores asalariados por acuerdo del gobierno y el sector empresarial, para reducir históricamente el salario real.

sector de supervivencia² (comercio callejero, artesanía, servicios personales, prostitución callejera, etc.), la economía subterránea (contrabando, narcotráfico) y la delincuencia individual u organizada, de crecimiento explosivo en la última década. Estas actividades, sobre todo el comercio callejero, se han expandido por el Centro Histórico, las grandes vías, los nudos de transporte colectivo y todo punto de confluencia poblacional, para convertirse a la vez en solución de la necesidad de supervivencia y problema para la ciudad; según los registros del Departamento del Distrito Federal (DDF), muy inferiores a la realidad, habría 1.693 puntos de venta, con 91.000 vendedores ambulantes, a los que debe añadirse los «toreros»³ y ocasionales no registrados y una masa de otras actividades (Secretaría de Gobierno del Distrito Federal).

Una parte del sector de supervivencia se articula con el narcotráfico, el contrabando y el robo de mercancías, que lo abastecen, y sirve a la evasión fiscal de proveedores y comerciantes «formales». Inestabilidad laboral, bajos ingresos, ausencia de prestaciones sociales, malas condiciones de trabajo, extorsión de parte de líderes, gestores, policías, inspectores de vía pública y otros funcionarios, así como represión policial, es lo que caracteriza la vida de los «informales». Es un elemento sustantivo de conflictividad urbana. Parece evidente que la «informalidad» no podrá superarse mientras persista la situación de desempleo y bajos salarios característica del periodo. Los vendedores en la vía pública están sometidos a la explotación por los proveedores de su mercancía y los dueños de múltiples puestos, que los tienen como asalariados sin protección laboral; también son extorsionados por sus líderes y los funcionarios públicos, y controlados políticamente en forma corporativa por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otras organizaciones políticas.

La economía subterránea (contrabando, delincuencia organizada, proveedores), ligada estrechamente a la delincuencia como tal, permite formar grandes fortunas al amparo de la corrupción policial, judicial y administrativa; absorbe fuerza de trabajo y es componente esencial de la violencia urbana. La frontera administrativa DF - estado de México no aísla los procesos económicos; la fluidez de la fuerza de trabajo formal o informalmente empleada, de la delincuencia, etc., entre ambas áreas dificulta su regulación. El «ambulante» tiene una naturaleza contradictoria: es válvula de escape al desempleo creciente y única forma semilegal de subsistencia de parte importante de la población empobrecida; al mismo tiempo, se relaciona con sectores de capital al margen de la legalidad e inmersos en la delincuencia fiscal o penal; finalmente, su relación con la autoridad, que trata de controlarlo, reprimirlo o desalojarlo sin éxito, es muy conflictiva.

² Preferimos este concepto al de «sector informal», en razón de las insuficiencias puestas en evidencia por más de una década de debate teórico y empírico, en el que hemos participado.

³ Denominación popular de quienes realizan la venta callejera sin lugar fijo, para evadir a los inspectores oficiales o la policía, o venden sus mercancías moviéndose entre las filas de autos en las vías de alto tránsito.

Una política social excluyente

El empobrecimiento de la población se combina con una política social regresiva, individualista y mercantil con programas mínimos dirigidos a los indigentes (Programa Nacional de Solidaridad de Salinas y Progresía de Zedillo), que restringe la protección social de la población, históricamente insuficiente (Laurell). La primera expresión de esta política social a nivel nacional fue un drástico recorte del gasto social público, que cayó del 9,13% del PIB en 1982 al 6,04% en 1988 para luego tener una lenta recuperación alcanzando su anterior nivel en 1994, para caer nuevamente en 1995. Con este prolongado desfinanciamiento, las instituciones públicas sufrieron un deterioro que hoy es pretexto para desmantelarlas y promover al sector privado como gestor de los fondos sociales y prestador de los servicios. Un ejemplo son las recientes reformas a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).

Otra estrategia de la política social es la descentralización de los servicios educativos, de salud y de los programas sociales selectivos. Su principal problema es que transfiere a las entidades federativas recursos humanos, físicos y financieros insuficientes y en condiciones deterioradas; el gobierno federal se queda con el control sobre los programas, el financiamiento e incluso la relación laboral. No incrementa el de por sí insuficiente presupuesto para estos servicios y procede a su redistribución entre los estados en función de sus niveles de marginación. Actúa según la lógica de un presupuesto fijo y no según la de las necesidades insatisfechas. Este procedimiento se está utilizando en la distribución del Fondo de Coordinación Fiscal (recursos federales asignados a los municipios para obras de infraestructura y sociales) y significa una importante merma de recursos para el DF.

Luego de alcanzar su máximo histórico en 1981, la inversión y el gasto social del gobierno federal, del cual depende el del DF, no han cesado de caer en términos de índice y de participación en el PIB. Este descenso afecta los rubros básicos de la atención a la población, que constituyen la parte indirecta o diferida del salario o el ingreso. La política de vivienda del DF está totalmente condicionada por el fondeo bancario, que por sus exigencias a los «sujetos de crédito», excluye del acceso a los programas de vivienda a un 70% de las familias de menores ingresos, e individualiza el crédito cerrando el paso a las organizaciones sociales –tratadas como «monopolios»–, paralizando así su acción autogestionaria de alto coeficiente multiplicador en términos de viviendas producidas. La franja de trabajadores con menos de dos salarios mínimos como ingreso, mayoritaria, carece de alternativas para resolver su necesidad habitacional.

La privatización de la infraestructura y los servicios públicos ha sido aplicada por los tres últimos gobiernos federales, a través de dos vías: el estancamiento de la oferta pública frente al crecimiento de la demanda, y la venta o concesión de servicios a empresas privadas, tanto en el país como en la capital. Ello hace sentir

sus efectos en el encarecimiento de las tarifas para los sectores de menores ingresos y, ante la caída del salario real, lleva a la disminución del consumo, con el consiguiente deterioro de la calidad de vida (Pradilla 1995a).

La población de la ZMCM y del resto del país sufre el impacto de esta política social, que significa el abandono de la responsabilidad del Estado en este ámbito. Con el esquema, antes expuesto, de reparto de los recursos federales, se espera que las transferencias para operar los servicios de salud y educación de la capital, en proceso de descentralización, disminuyan en términos absolutos en los próximos años. No se prevén próximas inversiones federales en infraestructura ni nuevas plazas de trabajadores en los sectores mencionados.

Esta realidad se agrava al constatar que el DF y sus servicios públicos atienden a la masa de población flotante proveniente de la ZMCM y otras localidades de estados vecinos y, en casos como la salud y educación, a personas venidas de todo el país, sin que las entidades de origen contribuyan fiscalmente para cubrir su costo. El deterioro de las condiciones materiales de vida es expresión y causa del empobrecimiento de una parte considerable de la población de la capital. Los déficit cuantitativos y cualitativos aparecen en todos los rubros de infraestructura y servicios sociales (Cárdenas).

A pesar de que la ZMCM tiene una de las mejores situaciones en infraestructura y servicios en el país, presenta una desigualdad muy grande en términos de la estructura social y territorial. Mientras las medianas y grandes empresas y los grupos de altos ingresos en sus respectivos territorios gozan de equipamiento y servicios tecnológicamente avanzados en cantidad y calidad muy por encima de la media nacional, la población y la economía de los sectores populares en sus asentamientos, sobre todo en la periférica resultante de procesos «irregulares» de urbanización, carecen de ellos, los reciben en cantidad insuficiente o de muy mala calidad.

La acción pública federal y local es sectorialmente fragmentada, desintegrada, descoordinada en el DF y la ZMCM; no parte de la articulación de acciones simultáneas de diferentes áreas de gobierno en un mismo territorio para potenciarlas; las decisiones son centralizadas y en ellas no participa la comunidad involucrada; no hay apoyo para la acción autogestionaria en infraestructura y servicios urbanos. La acción empresarial en las actividades privatizadas es aún más diferenciada según los niveles de ingreso y la situación de las áreas urbanas. Podemos hablar de un proceso de fragmentación y exclusión socioterritorial, producto de la lógica mercantil impuesta a la dotación de un número creciente de satisfactores urbanos básicos, de la inaccesibilidad causada por los bajos y decrecientes ingresos y la reducción de la acción y el gasto en estos rubros. La precariedad y degradación de las condiciones materiales de vida de la población del DF y la ZMCM, es un factor generador de conflictos sociales y políticos y movilizaciones callejeras, con su efecto disruptor de la vida urbana.

Un efecto de 15 años de estancamiento de la economía, aplicación de políticas de ajuste neoliberal y reducción del gasto público social ha sido el empobrecimiento relativo y, en una franja significativa, absoluto, constante y masivo de los sectores mayoritarios de la población. A pesar de ser uno de los núcleos más dinámicos de la economía nacional, aun durante la crisis, la ZMCM expresa este proceso. El 57,2% de los hogares de la ZMCM se encontraba clasificado como pobre en 1990 (35,9%, muy pobre o indigente); el DF arroja cifras un poco mejores: 51% y 30,2% respectivamente (Boltvinik). La pobreza se acentúa en las delegaciones⁴ más atrasadas y sus colonias populares periféricas, donde llega al 92,4%, mientras el 53,3% se encuentra en la pobreza extrema o indigencia (Schteingart). Suponemos que esta situación empeoró como efecto de la profunda recesión de 1995, la caída del salario real y el aumento del desempleo.

Esta pauperización es resultado de la combinación de cuatro procesos: mantenimiento de altas tasas de desempleo que alimentan la informalidad; caída histórica de los salarios directos reales; reducción drástica del gasto social y su impacto sobre la disminución del salario indirecto; y deterioro creciente de las condiciones materiales de vida en la ciudad.

Los más vulnerables y excluidos

La exclusión socioeconómica y territorial tiene mayor agudeza para los grupos sociales más vulnerables del sector popular empobrecido: niños en general y de la calle, ancianos, indigentes, discapacitados, alcohólicos y drogadictos, agravada por la diferencia de género. Esta situación involucra a cerca de 280.000 habitantes del DF: de ellos, 13.373 son niños de la calle; 12.941 indigentes y cerca de 250.000 ancianos. Habría que agregar que unas 20.000 familias dependen del ejercicio de la prostitución. La otra mitad de la metrópoli, los municipios conurbados, debe presentar una situación similar.

Las causas de la presencia de niños, jóvenes y ancianos viviendo en la calle, del tráfico de personas para el ejercicio de la prostitución y el abandono de la tercera edad, pueden resumirse en el aumento de la pobreza extrema, que genera descomposición familiar y social aguda y lleva a la violencia intrafamiliar en la que mujeres, niños y ancianos son víctimas comunes de violación y maltrato físico. Es el reflejo de la pobreza nacional, porque el 60% de la población afectada viene de la provincia (Cárdenas, pp. 50-53).

Igualmente grave es la operación de mafias que controlan el mercado de drogas y la prostitución infantil y de adultos, lo que se relaciona con la existencia de miles de giros negros⁵ legales o clandestinos, que cuentan con la complicidad y

⁴ Subdivisión político-administrativa en el Distrito Federal.

⁵ Bares, clubes privados, discotecas, *table dance*, cantinas, lupanares y otros lugares de diversión.

corrupción de autoridades administrativas y policías. El tráfico de personas para ejercer la prostitución es un sistema que compra, engaña y atrae a mujeres de diferentes sitios del país y las coloca y explota como servidoras sexuales. Como parte de la cadena de prostitución infantil, se han encontrado casas-hogar clandestinas de las que no existe registro y a donde agentes de la policía judicial llevaban niños de la calle; de ellas salen niños para la prostitución, que es un negocio muy «rentable» por cuanto la tarifa que se paga es mucho mayor; los niños desaparecen sin que haya reclamos porque ni siquiera se conoce su existencia.

A los ancianos, productivos durante 40 o más años, se les ve como carga para la economía familiar: el 40% de ellos no tiene derecho a ningún tipo de pensión; constituyen más del 50% del total de indigentes; lo mismo pasa con los discapacitados y enfermos mentales. No existen programas de salud pública que brinden asistencia gratuita a los problemas de relación familiar, a discapacitados y ancianos; sólo se atienden enfermedades físicas en primer grado. Esto provoca que muchos de los enfermos mentales (el 50% de los indigentes adultos sufre trastornos mentales) sean expulsados de su familia y vayan a la calle, que no se atiendan los primeros síntomas del desprendimiento de los niños de la familia y que la desvalorización, desesperanza y depresión nunca sean tratadas. Ya se tiene la tercera generación de niños que nacieron, viven y crecen en la calle, contra quienes recrudece la desconfianza social y a los que el sistema brinda menos oportunidades que a los demás niños.

La mendicidad, lo más bajo de la informalidad, y la delincuencia son las formas de subsistencia de los niños de la calle, ancianos abandonados, discapacitados pobres, alcohólicos y drogadictos expulsados de sus familias. Sin atención pública suficiente, ignorados y rechazados por la sociedad urbana mercantilizada e individualizada, sólo cuentan con el apoyo de organizaciones sociales carentes de recursos adecuados y suficientes. A ellos se añade otro sector muy vulnerable: la población indígena, sobre todo de mujeres y niños, emigrada desde sus comunidades por la miseria o la violencia; su número ha crecido en los últimos años por el conflicto en Chiapas y otras áreas indígenas del sur de México.

El consumismo y el estatus provocan que niños y jóvenes se prostituyan a cambio de ciertas satisfacciones, que con frecuencia sustituyen el afecto y la aceptación familiar y social. La descomposición del funcionamiento de la familia también origina la exclusión de estos sectores y la creciente violencia intrafamiliar. En el DF se aprobó en 1996 la única legislación que castiga esta violencia en el país; sin embargo, las denuncias son pocas porque los procedimientos judiciales de confrontación entre agredido y agresor no se desenvuelven convenientemente. Según datos oficiales, se denunciaron 4.000 delitos sexuales en las agencias especiales del DF, mientras que el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar atendió a 10.000 personas y el Albergue de la Procuraduría de Justicia del DF, recibió a más de 700 niños maltratados.

La gran ciudad, su laberinto de infraestructura e inmuebles, sus barrios y edificios deteriorados, son el abrigo de estos condenados por la urbe deshumanizada: coladeras de los sistemas de drenaje, túneles del metro, parques, lotes baldíos, edificios a medio demoler, bodegas abandonadas, son el hábitat de los más excluidos entre los excluidos, de los más oprimidos de los oprimidos. La ciudad no incluye a los sectores vulnerables, ni está hecha o adecuada para atender sus necesidades.

Exclusión social y violencia urbana

Uno de los problemas más graves de Ciudad de México es la inseguridad pública sufrida por sus habitantes. Diariamente, son víctimas de actos violentos de todo tipo: asaltos bancarios y a comercios, robo de autos y alojamientos, secuestros, violaciones, asaltos callejeros y en medios de transporte, etc. Las encuestas de opinión colocan este problema en el primer lugar de preocupación de sus habitantes; es uno de los grandes problemas nacionales y rebasa el ámbito metropolitano. El crecimiento de la violencia ha sido vertiginoso en los últimos años y expresa un descontrol civil y social grave. En 1995 se cometieron 598 delitos diarios en promedio en Ciudad de México; en 1996 ésta cifra creció a 679. La Asamblea de Representantes del DF estimó un crecimiento promedio del 18% de la violencia en la ciudad. Además, habría que agregar la gran cantidad de delitos que no son denunciados y no forman parte de la estadística oficial.

Los principales delitos son robo patrimonial, homicidio, robo a particulares, violencia sexual y delincuencia juvenil. Todos estos rubros han sufrido drásticos aumentos en los últimos dos años, de manera alarmante entre jóvenes con edades de 7 a 17 años. La Comisión de Derechos Humanos del DF ha planteado que el 90% de los delitos denunciados se queda sin castigo. Hasta septiembre de 1996 se habían llevado a juicio penal 8.859 averiguaciones previas, de las cuales 5.467 incluyeron al detenido y el resto –3.392–, no. Que las autoridades remitan a los delincuentes no garantiza que permanezcan en prisión. En el 80% de los casos los presuntos delincuentes salen libres. Otro elemento que agrava la situación en el DF y que tiene una fuerte vinculación con las organizaciones criminales, es el crecimiento de las adicciones, principalmente en sectores populares. Según el Sector Salud, entre 70% y 80% de los delitos registrados en la ciudad se comete bajo la influencia del alcohol o alguna droga. La existencia de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el DF está plenamente comprobada. De enero a septiembre de 1996, se desmembraron 56 bandas de narcotraficantes e iniciaron 2.828 averiguaciones previas por delitos contra la salud. Las autoridades calculan que en el DF existen unas 5.000 bandas delictivas, de las cuales 1.300 están perfectamente organizadas. Hasta 1997, la policía había desarticulado 503 organizaciones criminales, 318 de ellas tenían el robo como fuente de ingresos.

Ante este panorama, la reacción de las autoridades ha sido incrementar el presupuesto para compra de equipos más sofisticados y contratación y

entrenamiento de personal, además de la militarización de los mandos directivos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF. La respuesta al problema es militar, de incremento del aparato represor y la capacidad de movilización rápida de cuerpos de seguridad especializados. En el olvido quedan las causas profundas del incremento en la inseguridad: la crisis económica y la descomposición social, la miseria, el desempleo y el hambre (Cárdenas, pp. 66-70).

Esta problemática, común a toda gran ciudad latinoamericana, lo que muestra su origen estructural en el patrón de acumulación de capital y su crisis congénita, tiene múltiples determinaciones económicas, sociales, políticas, culturales y territoriales. El desempleo y la pobreza producen una masa de fuerza de trabajo disponible para engrosar las filas de la delincuencia organizada o la violencia individual en busca de la sobrevivencia. La rentabilidad de negocios como el narcotráfico, la prostitución y el robo de bancos, autos y otros bienes de alto precio, es el incentivo. El lucrativo negocio del tráfico de armas, producidas por grandes trasnacionales que se benefician con él, resuelve el problema de uno de sus insumos básicos.

Redes complejas de comercialización y circulación internacional de bienes como drogas y objetos robados, bancarias de lavado de dinero, inversiones inmobiliarias y comerciales donde se borra su origen, y la corrupción administrativa, policial y judicial, garantizan la realización de la mercancía y la reinversión y acumulación del capital. La concentración poblacional y económica, como origen y destino, el desordenado laberinto urbano, y la ausencia de servicios públicos adecuados son el escenario apropiado de estas actividades. El miedo y el silencio ciudadanos ofrecen una inocente complicidad.

La cultura de la violencia difundida sin cesar por los medios electrónicos de comunicación, sobre todo el cine y la televisión, educa a los aprendices de bandoleros; la individualización de la sociedad frena la acción colectiva como respuesta; la tradición popular de la *mordida*⁶ para evadir la aplicación de la ley, construye un camino para la corrupción de los cuerpos de seguridad estatal. La generalización de la corrupción en todos los ámbitos de la vida ciudadana, desde el pago para evadir las infracciones de tránsito hasta los grandes negocios empresariales y financieros turbios, ha penetrado profundamente en los cuerpos de policía, los aparatos judiciales y la administración pública. La ciudadanía no cree en la policía ni en la justicia, y no está dispuesta a colaborar en la lucha contra el crimen. Las mafias del crimen se han vuelto más poderosas que el aparato estatal. La gran metrópoli y sus habitantes son prisioneros de una violencia que sólo un patrón de organización social radicalmente distinto al actual, que parece no estar en la preocupación de casi nadie, podría controlar.

⁶ Palabra que en México designa el pago monetario que se entrega al policía, funcionario, juez, empresario, etc., para cubrir una violación a la ley, agilizar un trámite burocrático, obtener un empleo o un contrato irregular, etc. Podemos hablar de la *cultura de la mordida*.

Privatización de lo público, ciudadanos sin territorio y territorios excluidos

La metrópoli continúa su crecimiento tentacular y centrífugo que, junto con el de otras ciudades y pueblos de la megalópolis, forma una trama discontinua en densificación. Los promotores inmobiliarios devoran la tierra ejidal y comunitaria periférica, liberada por la contrareforma agraria de 1991 (Pradilla 1992), descomponiendo las comunidades tradicionales, destruyendo la agricultura y las reservas naturales, reemplazándolas por grandes fraccionamientos de lujo, clubes de golf, centros de recreación o áreas comerciales. Los antiguos pobladores campesinos son despojados de su tierra por la vía del mercado, su forma de producción es eliminada, se integran a la masa de «informales», y son repelidos hacia colonias populares en proceso de saturación o a la periferia más lejana.

La modernización tecnológica, la creciente individualización de la vida y la ideología urbana y las nuevas formas arquitectónicas de la posmodernidad (centros comerciales introvertidos, fraccionamientos y clubes privados cerrados, centros de negocios, etc.), producen territorios fragmentados, volcados a lo interno, cerrados al exterior, aislados del resto de la trama urbana. La mayoría de las veces, se trata de unidades físicas que ofrecen todo a sus usuarios, que no necesitan vivir ni usar el resto de la ciudad; se transportan a través de ella en sus automóviles cerrados. El resto de la población no puede acceder a estos territorios excluyentes y estrechamente vigilados. Unos y otros son ciudadanos con territorios demarcados o carentes de ellos. La violencia urbana refuerza este movimiento de privatización y guetización de la ciudad. Los nuevos conjuntos habitacionales de sectores de ingresos medios y altos se encierran en muros y se establecen estrictos controles de ingreso mediante policías privadas y medios electrónicos; en áreas de antigua urbanización, se cierran las calles con muros y rejas, para formar conjuntos controlados; los edificios de departamentos introducen nuevas medidas de control al acceso. Las viejas zonas comerciales abiertas a la calle, se deterioran y pierden su clientela; son reemplazadas por centros de compras de todos los tamaños y dirigidos a distintos estratos sociales, donde la calle se hace interior y semiprivada. Por todas partes aparecen los policías privados, cuyo número tiende a superar al de la policía pública.

Las antiguas unidades habitacionales para capas medias o de interés social, cuyos habitantes se pauperizan, sufren un proceso de densificación, hacinamiento y desgaste físico y social, son penetradas por la violencia y pierden su habitabilidad. Algunas colonias y barriadas populares se hacen impenetrables por la presencia de bandas infantiles y juveniles o grupos de delincuentes que controlan el territorio. Parques, plazas, zoológicos, áreas deportivas, auditorios, museos, bibliotecas y otros lugares públicos, entregados a empresas privadas y sectores mercantilizados, dejan de ser objeto de disfrute colectivo, y quienes carecen de recursos para pagar la tarifa, ganancia empresarial incluida, son excluidos de ellos.

La ciudad es todavía un producto colectivo, pero su apropiación y disfrute se individualiza y privatiza. Los costos siguen siendo comunitarios, pero las ganancias se personalizan. La metrópoli se fragmenta en mil pedazos aislados en la vida económica, social y cultural, pero que son objeto de los mismos mercados, insertos en la misma trama territorial y dominados por los mismos poderes hegemónicos que determinan su papel en ellas.

Hibridación cultural como forma de la exclusión

Por la intensa inmigración de los últimos 50 años, la metrópoli es un mosaico de poblaciones y culturas venidas de todo el país, aun de Centroamérica. Este hecho, la vecindad con Estados Unidos, la penetración comercial amplificada con el «libre» comercio, el papel de los medios de comunicación, sobre todo la televisión, y la ideología de la modernización, han producido un irrefrenable proceso de *hibridación* de la cultura de las masas urbanas (García Canclini), que sincretiza lo nuevo y lo viejo, lo local y lo internacional. El huipil⁷ y los jeans; la Virgen de Guadalupe, Madonna y las Spice Girls; la canción ranchera, el Tex-Mex y el rock; el taco⁸, la pizza y el *hot dog*; el pulque⁹, las aguas frescas y la Pepsi Light; el día de muertos y el Halloween; las charreadas¹⁰, el fútbol, el *football* americano y el béisbol de grandes ligas; los tianguis¹¹ y los supermercados, son algunas muestras de la superposición cultural que conduce al híbrido. Las formas y elementos culturales tradicionales y locales se segregan, descomponen, subordinan y fusionan fragmentariamente a las transnacionales; es el camino a su exclusión de la cultura. Quienes las mantienen, como identidad o por incapacidad económica, añaden un nuevo rasgo de exclusión: la falta de integración a la modernidad.

La acelerada obsolescencia de las mercancías *high tech* (computación, internet, multimedia, audiovisual, etc.), su alto costo relativo frente a los declinantes ingresos de las mayorías urbanas y las exigencias culturales de su uso, conducen a la profundización de la brecha tecnológica entre estratos sociales urbanos, del desarrollo cultural desigual y a la creciente exclusión de los sectores populares de una modernidad cultural cuyo valor civilizatorio es, al menos, cuestionable. Los edificios «inteligentes», la arquitectura posmoderna, los centros comerciales, las autopistas urbanas, los autos privados de lujo, desplazan la herencia indígena y colonial, se oponen a los jacales de las colonias irregulares, los tianguis, las calles enlodadas de la periferia y los destartados microbuses.

⁷ Vestimenta indígena tradicional, que usan los sectores populares y ha sido integrada en su forma tradicional o sofisticada a la moda de las capas medias y altas.

⁸ Tortilla de maíz enrollada y rellena con carne o frijol o verduras, etc., que constituye el alimento generalizado de la población mayoritaria, aunque también aparece en la dieta «mexicana» de los estratos medios y altos.

⁹ Bebida fermentada tradicional, derivada del jugo de la hoja del maguey.

¹⁰ Espectáculo donde los «charros» (vaqueros o rancheros mexicanos) ejecutan suertes de destreza y valor con caballos y toros.

¹¹ Mercado popular al aire libre, callejero, heredado de la cultura azteca.

La barrera económica se hace cultural, acentúa la diferenciación y excluye a los diferentes.

La transición política inconclusa y la esperanza en la encrucijada

La crisis económica de los 80, el violento ajuste estructural neoliberal, el impacto de los sismos de 1985 y la movilización colectiva para exigir una reconstrucción para el pueblo (Pradilla/Peralta/Castro), la agudización de los problemas metropolitanos y la dinamización de las organizaciones sociales, añadieron nuevos elementos a la descomposición del viejo régimen político de partido de Estado que mantenía el control absoluto del poder político en la metrópoli. En las elecciones de 1997 se manifiesta a nivel nacional y en el DF un cambio en la correlación de fuerzas políticas. El PRI, hegemónico durante siete décadas, pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados federal; y en el DF el opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) gana esa mayoría en la Asamblea Legislativa y la jefatura de gobierno local, con una amplia mayoría relativa, apoyándose fundamentalmente en los sectores populares y medios empobrecidos.

Una ciudad para todos, su propuesta programática (Cárdenas), tiene como uno de sus ejes básicos la *inclusión de los excluidos*. Aún es muy pronto para evaluar los resultados de su gestión. Sin embargo, se enfrenta a múltiples límites: a) no obstante el gran peso de la capital en el contexto nacional, este gobierno carece de control sobre variables esenciales como la política económica (industrialización, comercio, empleo y salarios); b) su programa no constituye una alternativa orgánica al neoliberalismo. Busca, con márgenes muy estrechos, reducir sus efectos más nocivos y excluyentes; c) las fuerzas sociales y políticas que lo sustentan son ideológicamente heterogéneas, lo que repercute en la composición del gobierno y las políticas reales que adopta; d) sólo gobierna la mitad de la ciudad, mientras la otra parte se halla fragmentada en débiles gobiernos municipales de distintas fuerzas políticas; e) el impacto de la crisis financiera y del mercado mundial petrolero han reducido significativamente su disponibilidad de recursos presupuestales; y f) la proximidad de las elecciones generales del año 2000 ha exacerbado el conflicto con las otras dos fuerzas políticas nacionales, que lo han vuelto su blanco.

Más allá de estos factores coyunturales, el problema central estructural es que la exclusión social, combinación inédita de explotación económica, opresión política, marginamiento social, degradación cultural y fragmentación territorial, es consecuencia orgánica del patrón neoliberal de acumulación de capital, por lo cual, para revertir su evidente agudización, habría que sustituirlo por otro distinto, aún no formulado de manera integral. Todavía persiste la convicción de que el neoliberalismo es la alternativa, o un mal necesario e irreversible, cuando menos «por ahora». Esta doble situación podría conducir al desgaste de la confianza, al deterioro de la esperanza y, también, a una inclinación de los ciudadanos metropolitanos hacia posiciones más conservadoras, que como se ve tampoco

darán solución a sus problemas, y que retardarán por años la apertura de la puerta a nuevas posibilidades.

Referencias

- Beristain, Javier: «Las finanzas públicas del Distrito Federal en 1997», UNAM, México. 1997, mimeo.
- Boltvinik, Julio: «La pobreza en el Area Metropolitana de la Ciudad de México en 1990» en Augusto Bolívar, René Coulomb y Carmen Muñoz (coords.): *Metrópoli, globalidad, modernización*, tomo II, UAM - Azcapotzalco, México, 1993.
- Cárdenas, Cuauhtémoc: *Una ciudad para todos. Otra forma de gobierno*, Fundación para la Democracia, México, 1997.
- Eibenschutz, Roberto: *Bases para la planeación del desarrollo urbano en la Ciudad de México*, tomos I y II, Porrúa - UAM - Xochimilco, México, 1997.
- García Canclini, Néstor: *Culturas híbridas*, Grijalbo, México, 1996.
- Garza, Gustavo: «El futuro de la Ciudad de México, megalópolis emergente» en G. Garza (coord.): *Atlas de la Ciudad de México*, El Colegio de México - DDF, México, 1988.
- Garza, Gustavo y Salvador Rivera: *Dinámica macroeconómica de las ciudades en México*, Inegi - El Colegio de México - IISUNAM, México, 1995.
- Gilly, Adolfo: *Nuestra caída en la modernidad*, Jean Boidó y Climent Editores, México, 1988.
- Guillén Romo, Héctor: *Orígenes de la crisis en México 1940 / 1982*, Era, México, 1984.
- Guillén Romo, Héctor: *El sexenio de crecimiento cero. México, 1982-1988*, Era, México, 1990.
- Guillén Romo, H.: «El fracaso neoliberal en México» en *Viento del Sur* N° 4, México, 1995.
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: *Resultados preliminares. Censo de población y vivienda. 1995*, Inegi, México, 1996.
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: *Sistema de cuentas nacionales de México. Producto Interno Bruto por entidad federativa 1993*, Inegi, México, 1996.
- Instituto Federal Electoral: *Resultados electorales federales de 1997*, IFE, México, 1997.
- Laurell, Ana Cristina: «La política social del neoliberalismo mexicano» en *Ciudades* N° 26, México, 4-6/1995.
- Martínez Assad, Carlos: *¿Cuál destino para el DF? Ciudadanos, partidos y gobierno por el control de la capital*, Editorial Océano, México, 1996.
- Ortega Carricarte, Carlos y Moisés Castillo García (comps.): *Hacia un nuevo balance de la política social en la Ciudad de México*, DDF - UNAM, México, 1996.
- Pradilla Cobos, Emilio: «Campo y ciudad en la nueva política agraria» en *Ciudades* N° 15, Red Nacional de Investigación Urbana, México, 7-9/1992.
- Pradilla Cobos, Emilio: *Territorios en crisis*, UAM-Xochimilco y Red Nacional de Investigación Urbana, México, 1993.
- Pradilla Cobos, Emilio: «La democratización postergada» en *Ciudades* N° 24, Red Nacional de Investigación Urbana, México, 9-12/1994.
- Pradilla Cobos, Emilio: «Privatización de la infraestructura y los servicios públicos: sus contradicciones» en *Argumentos* N° 21, UAM-Xochimilco, México, 1995a.
- Pradilla Cobos, Emilio: «Los territorios latinoamericanos en la nueva fase de transnacionalización neoliberal» en *Eure* vol. XXI N° 63, Santiago de Chile, 6/1995b.
- Pradilla Cobos, Emilio: «La megalópolis neoliberal: gigantismo, fragmentación y exclusión» en *Economía Informa* N° 258, Facultad de Economía, UNAM, México, 6/1997.
- Pradilla Cobos, E. (coord.), A. Peralta Sánchez y C. Castro García: *Vulnerabilidad, sismos y sociedad en la Ciudad de México. 1985 y el futuro*, Dirección General de Protección Civil del Distrito Federal y Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre, México, 1996.
- Reyes Heróles, Federico: *De frente a la capital. Diálogo con los candidatos*, Fondo de Cultura Económica, México, 1997.
- Schteingart, Martha (coord.): *Pobreza, condiciones de vida y salud en la Ciudad de México*, El Colegio de México, México, 1997.

- Secretaría de Gobierno, Departamento del Distrito Federal: «El comercio en vía pública», México, 1997.
- Valenzuela Feijóo, José C.: *El capitalismo mexicano en los ochenta*, Era, México, 1986.
- Valenzuela Feijóo, José C.: «Despilfarro y estancamiento: el fracaso neoliberal» en *Viento del Sur* N° 2, México, 7/1994.
- Valenzuela Feijóo, José C. y Julio Goicochea: «Dos crisis» en *Viento del Sur* N° 4, México, verano 1995.
- Zermeño, Sergio: *La sociedad derrotada. El desorden mexicano del fin de siglo*, Siglo XXI, México, 1996.



La ilustración acompañó al presente artículo en la edición impresa de la revista.